



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, treinta de junio de dos mil veintitrés**

**E22-085**

**PROCESO.**

**EJECUTIVO CONEXO**

**EJECUTANTE :**

**DORA LIGIA LEGARDA GALLEGO**

**EJECUTADO:**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y  
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -  
UGPP**

**RADICADO:**

**05001-31-05-014-2021-00143-02**

**DECISIÓN:**

**CONFIRMA AUTO**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto que resolvió las excepciones dentro del proceso ejecutivo conexo de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 021** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

- Mediante sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín el 31 de octubre de 2013 DECLARÓ que entre el señor DARLEY ARBEY PARRA PRISCO y el señor FABIO HERNÁN SUARÉZ IDARRAGA existió una relación laboral en la cual TRANSERVICIO fungió como intermediaria, sin que se hubiera efectuado afiliación a POSITIVA S.A. para riesgos profesionales ni a PORVENIR S.A. para pensiones. Así mismo DECLARÓ que el señor DARLEY ARBEY PARRA PRISCO falleció en un accidente de trabajo respecto del cual no dejó prestación alguna.
- La anterior decisión fue MODIFICADA mediante sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Dual de Descongestión, el 17 de julio de 2015, CONDENANDO a POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA (como sucesora de los bienes, derechos y obligaciones de la ARP del seguro social) a pagar a favor de la señora DORA LIGIA LEGARDA GALLEGO en su

calidad de compañera permanente del fallecido Darley Arbey Parra Prisco, una pensión de sobrevivientes de origen profesional en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente a partir del 05 de diciembre de 2005, así: entre el 05 de diciembre de 2005 y el 25 de enero de 2014 (fecha en la cual MELISA PARRA RUA hija del fallecido cumplió la mayoría de edad) el 50% de dicha pensión y desde el 26 de enero de 2014 en adelante el 100% de dicha pensión. Así mismo se condenó a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA a pagar los intereses moratorios a la tasa máxima vigente sobre cada mesada adeudada desde el día 26 de agosto de 2007 y hasta el día que se realice el pago total y las costas del proceso.

- La decisión fue objeto de recurso extraordinario de casación y la Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 13 de julio de 2020, decidió NO CASAR la sentencia dictada el 17 de julio de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Medellín.
- El 23 de abril de 2021 la parte demandante solicitó se librara mandamiento en contra de la UGPP como sucesor procesal de POSITIVA por las sumas reconocidas en el proceso ordinario incluidas las costas procesales y las costas del ejecutivo.
- Por auto del 14 de diciembre de 2021 el a quo libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de \$41.232.275 como retroactivo pensional causado entre el 05 de diciembre de 2005 y el 17 de julio de 2015, por las mesadas pensionales causadas a partir del 18 de julio de 2015 en los términos en los que fue reconocido el derecho en la sentencia proferida por la Sala Segunda Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en del 17 de julio de 2015, por los intereses moratorios a partir del 26 de agosto de 2007 sobre cada una de las mesadas que se causaron hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, por la suma de \$322.175 por concepto de costas de segunda instancia y \$4.240.000 por las costas en sede de casación.
- En audiencia celebrado el 8 de agosto de 2022 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín resolvió las excepciones propuestas por la ejecutada, DECLARANDO NO PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN y ordenó continuar con la ejecución por las sumas y conceptos enunciados en el mandamiento de pago proferido el 14 de diciembre de 2021, decisión que fue apelada por la apoderada de la ejecutada.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ**

Argumentó que el presente ejecutivo estaba encaminado a obtener el pago de la sentencia proferida por la Sala Dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín del 17 de julio de 2015, decisión que fue objeto del recurso extraordinario de Casación y cuya decisión fue emitida por la

Corte Suprema de Justicia el 13 de julio de 2020, por lo que el auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, data de abril de 2021. Además, indicó que en el mandamiento de pago se dispuso tener como sucesor procesal de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-UGPP y librar mandamiento de pago en contra de dicha entidad por los conceptos ordenados en la referida sentencia, auto que se encuentra debidamente ejecutoriado.

De otro lado indicó que si bien la entidad ejecutada había propuesto las excepciones de pretermisión del trámite reglado para efectos de presentación de cuenta de cobro, falta de legitimación en la causa y prescripción, debía recordarse que tratándose de la ejecución de sentencias judiciales, el artículo 442 del Código General del Procesal restringió las excepciones que podían proponerse a las de pago, compensación, confusión o acción, remisión, prescripción o transacción, siempre que se base en hechos posteriores a la emisión de la respectiva providencia, por lo que solo se estudiaría la excepción de prescripción ya que las demás propuestas no estaban dentro de las establecidas en la norma.

En cuanto a la excepción de prescripción consideró el a quo que conforme a los artículos 151 del CPT y 488 del CST el término que opera es de 3 años contados a partir del momento en que la ejecución se haga exigible y en el presente caso, mediante auto del 14 de abril de 2021 se dispuso obedecer lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia que le puso fin al recurso extraordinario de casación no casando la decisión del Tribunal y como la demanda ejecutiva fue radicada el 18 de agosto de 2021, significa que no se superó el término trienal contemplado en las normas citados por lo que declaró no probada la excepción de prescripción y ordenó continuar la ejecución.

## **2.2. ARGUMENTOS DE INCONFORMIDAD DE LA EJECUTADA**

Señaló que a la UGPP nunca se le presentó cuenta de cobro, que si bien no es una de las excepciones consagradas en el Código General del Proceso, es un requisito que debe cumplir la parte para que la entidad pueda realizar el pago de la sentencia y dentro del traslado hay un oficio que le envían a POSITIVA el 23 de octubre de 2020, como cumplimiento de sentencia, pero no tiene ningún radicado, es simplemente un oficio, pero sin radicado.

De otro lado insistió que existe falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto la UGPP no es la competente para dar cumplimiento a la sentencia, por lo que solicita que se revoque el auto que resuelve excepciones y ordena seguir adelante la ejecución por cuanto no se probó el cumplimiento de haber presentado la cuenta de cobro además de que la UGPP no es la encargada de dar cumplimiento a la sentencia.

### 2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En primer lugar la **UGPP** reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el auto que resolvió excepciones, esto es, que la parte actora no cumplió con la carga de presentar la cuenta de cobro ante la entidad ejecutada impuesta en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que por tanto no es posible proceder con su pago. Así mismo insistió que toda vez que el causante falleció en 2005 no es competencia de la UGPP el pago de la obligación sino de la PREVISORA LA VIDA S.A., que fue quien asumió los riesgos laborales del ISS como POSITIVA S.A con posterioridad a septiembre de 2008.

De otro lado el apoderado de la parte **ejecutante** indicó que debe confirmarse la decisión del a quo de seguir adelante con la ejecución contra la UGPP por los valores y conceptos ordenados en el mandamiento de pago, toda vez que las excepciones propuestas por la entidad ejecutada no son procedentes por el título ejecutivo una decisión judicial ejecutoriada y por tanto solo proceden las indicadas en el artículo 442 del C.G. del P. Agregó que además de no ser procedentes dichas excepciones como la de falta de legitimación en la causa tampoco es cierta, dado que la UGPP es la sucesora legal de las obligaciones pensionales de la extinta ARP del Seguro Social por expresa disposición legal, ya que el causante nunca estuvo afiliado a POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. Así mismo recalcó que tampoco es cierto que se haya pretermitido el trámite de presentar cuenta de cobro, dado que en octubre de 2020 se solicitó el cumplimiento de la sentencia ante POSITIVA S.A., la cual fue respondida el 17 de noviembre del mismo año informando que mediante radicado SAL-2020 01 005 201461 de 01 de septiembre de 2020 y rad. UPGG No. 2020400301602532 de la misma fecha se había remito el tramite a la UGPP, por ser la entidad a la que correspondería el cumplimiento del fallo y aunado a lo anterior la vinculación de la UGPP como sucesora procesal fue definida por el juzgado en auto de diciembre de 2021, providencia que se encuentra en firme y que implica asumir el proceso en el estado en que se encuentra

De conformidad con el artículo 70 del C.G. del P.

Finalmente manifestó que no operó el fenómeno prescriptivo dado que la sentencia cobró ejecutoria el 13 de julio de 2020, la demanda ejecutiva se presentó el 28 de enero de 2021, interrumpiéndose la prescripción y el mandamiento de pago se notificó el 15 de diciembre de 2021.

### 3. CASO EN CONCRETO

El problema jurídico consiste en determinar si la decisión del a quo de declarar no probada la excepción de prescripción y continuar la ejecución se encuentra ajustada a derecho o si por el

contrario debió declararse también la prosperidad de las excepciones propuestas por la ejecutada denominadas pretermitir el trámite reglado de presentación de cuenta de cobro y falta de legitimación en la causa.

No obstante lo anterior, encuentra la Sala que conforme lo normado por el artículo 442 del Código General del Proceso, cuando se trate del cobro de obligaciones cuyo título este contenido en una sentencia, como ocurre en el caso de autos, solo pueden formularse en forma taxativa las excepciones de PAGO, COMPENSACIÓN, CONFUSIÓN, NOVACIÓN, REMISIÓN, PRESCRIPCIÓN O TRANSACCIÓN siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la DE NULIDAD POR INDEBIDA REPRESENTACIÓN O FALTA DE NOTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO Y LA DE PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA. Indica la norma:

**ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES.** La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.

Resulta menester, para esclarecer el punto, arrimarse a la noción misma de excepción de fondo o sustancial. Y viene al caso entender que ella no puede apuntar a la discusión de la existencia misma del derecho sino a su vigencia, a su posible extinción por un hecho nuevo modificativo o extintivo. Por tanto, le asistió razón al a quo cuando no estudió las excepciones denominadas falta de presentación de cuenta de cobro y falta de legitimación en la causa, dado que las mismas no se encuentran contenidas dentro de las excepciones establecidas en la norma en comento y por tanto no era dable darles trámite pues las mismas se tornan improcedentes.

Empero, ello no significa que el legislador haya impedido que se ventilen las singularidades que ahora fundan el descontento de la recurrente, sino que la misma era viable exponerse en otro momento procesal, toda vez que en los términos aludidos en la norma anterior, así como en el

artículo 65 del CPT y la SS, deben alegarse de reposición y en subsidio el de apelación, contra la decisión proferida el 14 de diciembre de 2021 contentiva del mandamiento de pago.

Empero, en el caso de autos, es claro que mediante auto del 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito no solo libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de \$41.232.275 como retroactivo pensional causado entre el 05 de diciembre de 2005 a 17 de julio de 2015, por las mesadas pensionales causadas a partir del 18 de julio de 2015 en los términos en los que fue reconocido el derecho en la sentencia proferida por la Sala Segunda Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en del 17 de julio de 2015, por los intereses moratorios a partir del 26 de agosto de 2007 sobre cada una de las mesadas que se causaron hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, por la suma de \$322.175 por concepto de costas de segunda instancia y \$4.240.000 por las costas en sede de casación, sino que además en el artículo primero se reconoció a la UGPP como sucesor procesal de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS, cuando se indicó expresamente:

**PRIMERO: TENER** como sucesor procesal de **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP**, por las razones expuestas en la parte motiva.

Sin embargo, la anterior decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes, pues si bien la UGPP presentó un escrito denominado recurso de reposición y excepciones visible en el archivo 26 del expediente digital, mediante auto del 11 de febrero de 2022 (archivo 27) el juzgado indicó que toda vez que dicho escrito realmente no planteaba las inconformidades del mismo, por lo que no se realizó ningún pronunciamiento frente al recurso, y solo se tuvo en cuenta como escrito de excepciones, según se ve:

Ahora, si bien es cierto el memorial hace referencia a la interposición del recurso, no menciona las inconformidades del mismo, razón por la cual no se realizará ningún pronunciamiento.

**RESUELVE**

**PRIMERO: TENER** notificado por conducta concluyente a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP** del auto que libró mandamiento de pago, por las razones expuestas en la parte motiva.

**SEGUNDO: CÓRRASE** traslado a la parte ejecutante del escrito de excepciones presentados por la UGPP, en los términos establecidos en el artículo 443 del C. G. del P., por las razones expuestas.

**TERCERO: REQUERIR** al apoderado judicial de la parte ejecutante para que preste juramento en los términos del artículo 101 del CPTYSS.

Aunado a lo anterior, y en gracia de discusión, tampoco encontraría esta Magistratura vocación de prosperidad a los argumentos planteados por la recurrente por las siguientes razones:

El Artículo 68 del Código General del Proceso estipula las acciones que hay lugar a emprender cuando ocurre la extinción, fusión o escisión de una persona jurídica vinculada como parte en el proceso judicial, disponiendo al efecto la facultad para los sucesores, de comparecer al proceso a defender sus derechos e intereses, pero derivando efectos respecto de ellos en caso de no concurrencia; norma que es del siguiente tenor literal en lo pertinente:

**“ART. 68.—Modificado artículo 59 Ley 1996 de 2019. Sucesión procesal.**

(...)

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurren. (...)”

Aclarado lo anterior, tenemos que de conformidad con el artículo 80 de la Ley 1735 de 2015 las pensiones que estaban a cargo de POSITIVA SA cuyos derechos fueron causados originalmente a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pasarían a ser administradas por la UGPP y pagadas por el FOPEP previo el traslado de la reserva actuarial correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Posteriormente el artículo 108 de la Ley 2008 de 2019 señaló

” El valor de la reserva correspondiente a los cálculos actuariales adicionales que sea necesario efectuar por los derechos pensionales que no se encuentren incluidos en el cálculo actuarial inicialmente aprobado en desarrollo del Decreto 1437 de 2015 y de fallos judiciales, serán asumidos por la Nación con cargo a las apropiaciones previstas en cada vigencia para el pago de las pensiones en el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - Pensiones Positiva S.A.

Le corresponderá a la UGPP el ingreso a la nómina de los pensionados de estas obligaciones que serán pagadas con los recursos previstos en el PGN.”

Lo anterior fue reiterado en la Ley 2063 de 2020 artículo 109 que dispuso:

**“ARTÍCULO 109.** Las obligaciones de pago de las reservas a cargo de la ARL Positiva que se encuentren insolutas y las que se deban pagar a futuro, por aquellas pensiones o reliquidaciones que no se encuentren incluidas en el cálculo actuarial aprobado en desarrollo del artículo 80 de la ley 1735 de 2015 y su decreto reglamentario, así se hayan derivado de fallos judiciales ejecutoriados en cualquier tiempo, serán asumidos por la Nación con cargo a las apropiaciones previstas en cada vigencia a ser transferidas al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - Pensiones Positiva S.A.

Le corresponderá a la UGPP la elaboración del cálculo actuarial correspondiente y el ingreso a la nómina de los pensionados de estas obligaciones que serán pagadas con los recursos trasladados al FOPEP del Presupuesto General de la Nación.”

Por tanto, para la Sala es claro que en el caso de autos, operó una sucesión procesal entre POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS y la UGPP por mandato expreso de la Ley, dado que la muerte del causante se dio por causas de origen profesional cuya obligación hubiera estado originariamente a cargo del ISS por ser anterior al año 2008 y por tanto le corresponde su pago a la

UGPP conforme a las normas citadas, en consecuencia es quien debe asumir el pago de las sumas ordenadas en el mandamiento de pago librado en el presente proceso, como de forma acertada lo indicó en el a quo, por lo que no le asiste razón a la apoderada de la ejecutada en sus argumentos. Ahora, también encuentra la Sala que le asistió razón al a quo al declarar que no prosperó la excepción de prescripción, pues conforme lo estipula el artículo 488 del CST, las acciones correspondientes a los derechos regulados en ese Código prescriben en 3 años que se cuentan desde que la respectiva obligación se ha hecho exigible y según el artículo 489 ibídem, el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. Y el artículo 151 del CPTSS señala que las acciones que emanen de las leyes sociales prescriben en tres años que se cuentan desde que la obligación se hizo exigible y también consagra su interrupción y nuevo cómputo, por una sola vez y por el mismo período, en virtud de la reclamación del trabajador al empleador.

En el caso de autos, la sentencia que dio origen a la ejecución quedó ejecutoriada el 13 de julio de 2020 cuando quedó ejecutoriada la sentencia de la Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema de Justicia que resolvió el recurso extraordinario de casación y decidió no NO CASAR la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Medellín, el 23 de octubre de 2020 se solicitó ante POSITIVA S.A. el cumplimiento de la sentencia y la demanda ejecutiva se radicó el 23 de abril de 2021 antes de que transcurriera el término trienal, le asistió razón al a quo al DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN y ordenar continuar la ejecución por lo que se CONFIRMARÁ dicha decisión.

Ahora, si bien mediante memorial allegado el 24 de octubre de 2022 la UGPP aduce que ya dio cumplimiento a la sentencia y allega copia de la Resolución RDP 24847 del 22 de septiembre de 2022 a través de la cual se reconoce la pensión de sobrevivientes en cumplimiento del fallo judicial, lo cierto es que al proceso no se aportó constancia de que dicha resolución efectivamente se hubiera notificado a la ejecutante o que ya se le hubiera efectuado el pago que se enuncia en la misma, por lo que no puede tenerse como cumplida la obligación por no tenerse constancia de ello, razón por la cual se devolverá el proceso al juzgado de primera instancia para que allí se surtan las etapas pertinentes, donde la entidad ejecutada podrá hacer llegar las constancias del pago adecuadas para ser incorporadas al proceso y resolver lo que corresponda.

En consecuencia no hay lugar a REVOCAR la decisión objeto de impugnación por lo que la misma será **CONFIRMADA** en su integridad.



Costas en esta instancia a cargo de la UGPP por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.00

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA** el auto proferido el 8 de agosto de 2022 por parte del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral instaurado por la señora **DORA LIGIA LEGARDA GALLEGU** contra **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, de conformidad con la parte motiva.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la UGPP por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.00

Lo anterior se notifica por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 113 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 4 DE JULIO DE 2023

Secretario